

C. INSERCIONES

1

**INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO DELICHI**

**Informe del veedor judicial referido
a las elecciones internas llevadas a cabo
en la ciudad de Córdoba por la Unión Cívica
Radical el 10 de agosto de 2003**

Señor juez:

A V.S. informo:

Que siendo las 8,30 horas del día domingo 10 del corriente mes y año, me constituí en el domicilio de calle Boulevard San Juan 209, sede del partido Unión Cívica Radical, junto con los otros dos veedores judiciales designados en autos, a fin de asistir en ese carácter al comicio interno de la agrupación mencionada, siendo recibidos por miembros de la Junta Electoral y apoderados de las líneas internas participantes en el comicio, una de las cuales manifiesta que había escuelas que no abrían sus puertas para el comicio citando la seccional 14 como la más significativa ya que ninguna escuela se encontraba abierta, manifestando asimismo que había problemas en las seccionales 5ª y 12ª.

Siendo las 9 horas, procedí a verificar las denuncias referidas a la seccional 14, a las 9,15 horas, me constituí en la Escuela República del Líbano, la cual se encontraba cerrada; a las 9,30 horas en la Escuela Zorrilla, pudiendo constatar que la misma no había abierto sus puertas, encontrándome en el lugar con apoderados de listas, los señores Guillermo Luque por Coraje y Cambio y el señor Matías del Pino por el Movimiento de Transformación Radical, quienes se encontraban en el lugar desde las 8 horas y me informaron que nadie se había presentado, ni siquiera los presidentes de mesa, asimismo me manifestaron que consultada la directora de la escuela les había manifestado que no tenía notificación alguna sobre que la escuela estaba afectada al comicio, luego pude constatar las escuelas Alejandro Gallardo, Lazcano Colodrero, M. Zalotti y Litback, encontrándose todas cerradas. Acto seguido me dirigí al comité de la seccional 14, constatando que las urnas se encontraban en el mismo y se me manifestó que las escuelas de ese circuito permanecían cerradas y que se encontraban a la espera de una resolución de la Junta Electoral Partidaria. Con esa información me dirigí nuevamente a la sede de la agrupación.

Siendo las 11 horas, ya en la sede partidaria los apoderados de las líneas internas participantes del comicio me hicieron entrega del escrito que adjunto a la presente denunciando una serie de irregularidades, acto seguido la Junta Electoral partidaria me acompaña la resolución dictada en cuanto a igual presentación efectuada por los apoderados de

lista citados (se adjunta resolución) por ante esa junta, donde se nos solicita que nos hagamos presentes en los lugares denunciados a los fines de constatar la veracidad de lo allí manifestado; nuevamente en la secc. 14, pude constatar que las mesas habían sido habilitadas en: escuela Raúl Martínez 4 mesas, Inmaculada 1 mesa, Saúl Taborda 4 mesas y comité seccional 143 mesas.

Nuevamente en sede partidaria, siendo las 14:15, los apoderados de listas me hacen entrega de una copia de la presentación efectuada ante Junta Electoral partidaria, donde decidían el retiro de las listas que representaban (se agrega el escrito); requeridos por Junta Electoral a la hora 14:45 nos hicimos presentes en la Secretaría Electoral donde se nos entregó copia de la resolución de la J.E. dando por finalizado el acto comicial en virtud del retiro de las listas contendientes (se acompaña resolución). Que es todo cuanto tengo que informar a V.S.

Córdoba. 11 de agosto de 2003.

2

**INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO BULLRICH**

**Fundamentos de la oposición del señor diputado
al dictamen de las comisiones de Defensa
del Consumidor, de Comercio y de Justicia
en el proyecto de ley de la señora diputada
Córdoba por el que se modifica la ley 24.240,
de defensa del consumidor**

Señor presidente:

Habiendo transcurrido 13 años desde la sanción de la ley 24.240 de defensa del consumidor, este bloque se complace en la iniciativa de llevar adelante una reforma a la ley que nos convoca.

Sin embargo, si observamos en forma detallada el proyecto de ley llevado a consideración, presenciábamos una modificación sustancial no sólo de la letra de la ley sino también de su espíritu. En aras de ampliar el campo de defensa en el ejercicio de los derechos de los consumidores, se otorgan en forma alarmante facultades amplias a las autoridades de aplicación tanto nacional como locales.

Haré una breve recorrida por el articulado del proyecto deteniéndome en observaciones puntuales.

El artículo 1º amplía el objeto de las contrataciones de consumo. De esta manera, por un lado se extiende el carácter de consumidor equiparándose a los no contratantes con los consumidores. Así se considera consumidor "a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo". Resulta vaga la expresión. Proponemos su exclusión.

Por otro lado se incluye a los contratos a título gratuito. Consideramos esta inclusión peligrosa

puesto que pretender la responsabilidad por daños—artículo 40— (tal como se explicita en los fundamentos) del proveedor en una contraprestación gratuita es absurdo. La misma postura ha sostenido ADELCO al respecto.

En otro orden, si bien se mantiene la exclusión de proveedores que adquieren o utilizan bienes o servicios para integrarlos a otros bienes o servicios que ellos proveerán, se realiza una disquisición sin propósito con los proveedores grandes y pequeños. Opera, en otros términos, una discriminación montada en la capacidad operativa y adquisitiva del proveedor al decirse que todos aquellos que no revistan el carácter de PyMES—que compran bienes para luego integrarlos al proceso productivo—no son consumidores, excluyéndolos del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor.

El artículo 2º en su redacción original no incluía a las profesiones liberales. Con la nueva redacción están incorporadas, lo cual resulta un despropósito y atropello hacia las potestades de los poderes locales facultados para regularlas. Esta postura ha sido avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los colegios o consejos profesionales, tal como su naturaleza jurídica lo indica, son entes públicos no estatales y como tales, en uso de las facultades que les han sido conferidas, frente a una eventual denuncia respecto a la actividad del profesional se aplican las respectivas sanciones disciplinarias. Será en definitiva el tribunal de ética pertinente el encargado de sopesar las acciones con la normativa especial para el caso.

En otro orden, considerar que los profesionales liberales realizan actos de comercio y con ello persiguen fines de lucro constituye un error conceptual de tamaña consideración. Los sujetos en cuestión no son empresarios ni comerciantes ni ocasionales productores o comercializadores de bienes o servicios, sino que prestan servicios intelectuales que difieren sustancialmente del proceso productivo, entendido como las fases sucesivas destinadas a obtener un resultado que se vuelca en el mercado, cosa que no ocurre en la práctica del profesional.

Por todo lo expuesto proponemos se respete la redacción primigenia. Es decir, la exclusión del ejercicio de las profesiones liberales del alcance de la Ley de Defensa del Consumidor.

En el artículo 3º se define la relación de consumo, en forma imprecisa. Se propone la adoptada por Mercosur conforme al anexo del Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo: “Relación de consumo. Es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio, y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final”.

En otro orden, se crea un conflicto normativo para el proveedor respecto a qué norma le será aplica-

ble. Ello por la imprecisa redacción de la ley al decir: “...las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. Sabido es que el principio del derecho versa: ley especial deroga ley general, con esto queremos decir que de existir una normativa específica que alcance la actividad comercial del proveedor, ésa será la aplicable y no la Ley de Defensa del Consumidor.

Observamos además que se ha omitido el principio *in dubio pro consumidor*. Por ello proponemos se agregue “en caso de duda” en el articulado quedando redactado de la siguiente manera: “Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial, debiéndose aplicar en caso de duda siempre la norma más favorable al consumidor”.

Respecto al artículo 8º bis no se determina el alcance de la expresión “utilización de medios que otorguen apariencia de reclamos judiciales”. Sería pertinente definirlo.

El artículo 25 elimina la subsidiariedad de la Ley de Defensa del Consumidor en materia de servicios públicos en general, se brinden o no a domicilio. Con lo cual se pretende una vez más pasar por alto las normativas específicas. Así el proveedor podría ser juzgado en dos oportunidades por el mismo hecho; ello porque se determina que se aplicaría la normativa que analizamos y además el régimen que corresponda conforme a la actividad que desarrolle. Proponemos se mantenga la redacción original del artículo en su último párrafo, que contempla la supletoriedad de la Ley de Defensa del Consumidor para los casos de los servicios públicos domiciliarios con legislación específica.

El artículo 31 establece un nuevo procedimiento cuando existe error en la facturación. Respecto al plazo con que cuenta el usuario para presentar el reclamo, en su redacción original se establecían 15 días contados a partir del vencimiento de la factura para ejercer el derecho en cuestión. En el proyecto se propone modificarlo a 60 días. Consideramos que se desvirtuaría el reclamo una vez transcurrido tanto tiempo, por ello se propone un plazo de 30 días.

Los artículos 40 bis y 40 ter merecen serios reparos. Las figuras incorporadas lejos están del derecho argentino. Tal como lo mencionan los fundamentos pertenecen al derecho anglosajón. Así, en pos de resarcir al consumidor frente a un eventual daño producido por el proveedor, se han otorgado a la autoridad de aplicación potestades para estimar tanto el daño punitivo (artículo 40 bis) como el daño directo (artículo 40 ter). Lo cual constituye una invasión de la administración hacia la competencia de la Justicia ordinaria.

Justificar tal normativa en la frustración que puede llegar a ocasionar en el consumidor el fracaso de la vía administrativa y lo oneroso que implica entablar una demanda judicial, ya sea por dilación temporal como por cuestiones onerosas, no resulta convincente. Esperar una indemnización por daños queda en última instancia reservado a la esfera personal de cada uno. Un hiperproteccionismo legislativo puede tener efectos contraproducentes, incluso para el propio consumidor. La protección del consumidor debe ser compatible con la actividad económica. Si realmente se persigue desalentar o castigar ciertas prácticas de parte del proveedor, basta con la aplicación de una multa de parte de la autoridad de aplicación. Respecto a la competencia para la actuación de la misma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en el caso Angel Estrada (5 de abril de 2006): "La determinación y condena al pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la empresa distribuidora de energía eléctrica respecto del contrato celebrado con el usuario deben considerarse fuera de la jurisdicción especial atribuida al Ente Nacional Regulador de Electricidad por el artículo 72 de la ley 24.065 (ADLA, LII-A, 82)". La CSJN ha dicho que otorgar facultades jurisdiccionales a órganos de la administración implica un desconocimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza la defensa en juicio, y del artículo 109, que prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales.

Los artículos 41 y 42 puntualizan la competencia territorial en materia de aplicabilidad de la ley. Es dable destacar que la redacción lleva a una posible colisión al momento de determinar quién será la autoridad competente para aplicar derecho. Observamos que se avasallan competencias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al decir facultades concurrentes y mencionar: "...aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires". Así el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 79 reza: "Los municipios ejercerán las funciones emergentes de esta ley, de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las disposiciones complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones". Por su parte el artículo 80 dice: "Los municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en esta ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en este artículo". Queda claro que la cuestión de competencia toma relevancia atento a que las actuaciones llevadas a cabo por autoridades incompetentes tienen como resultante la afectación de una condición esencial del acto administrativo, la competencia, configurándose una

nulidad absoluta de las actuaciones. Por todo lo expuesto, proponemos que se reemplace en el artículo 42 la expresión "funciones concurrentes" por "funciones supletorias".

El artículo 45 desarrolla una serie de modificaciones en materia de procedimiento administrativo. Labrar un acta que inicie las actuaciones administrativas con la constancia del hecho —que se presume en infracción— y la norma, consideramos que resulta una vía transparente y eficaz para plasmar el procedimiento en sede administrativa. Proponemos se respete la redacción original en este punto.

En otro orden, la última Asamblea del Cofedec (Consejo Federal del Consumidor) dispuso que la primera parte del reclamo se hace de acuerdo al domicilio del reclamante. De no existir acuerdo, eventualmente se pasará a otra jurisdicción. Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se basa en la ley 757 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario, es decir, donde se gestionó la relación de consumo. Respecto a la jurisdicción, proponemos se le dé la opción al consumidor para iniciar su reclamo o denuncia entre el lugar de celebración del contrato, el domicilio del productor, importador, distribuidor o comercializador, o el lugar de ejecución del contrato.

Por otra parte, no estamos de acuerdo con la exclusión del plazo para que la administración dicte la resolución definitiva una vez concluidas las diligencias sumariales. Sabido es que la falta de plazos para que se expida dificulta el procedimiento administrativo para el administrado. Por ello se propone mantener la redacción original.

En cuanto a la vía recursiva, la ley en su texto primigenio establecía como tribunal de alzada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contra los actos administrativos que dispusiesen sanciones. Ahora, se amplía la órbita recursiva a las providencias que ordenen medidas de cese y a las medidas precautorias. Consideramos que esta última inclusión torna excesiva la utilización de la revisión judicial haciendo que prácticamente todo acto administrativo emanado de la autoridad de aplicación, sea o no definitivo, se revise en la vía judicial. Por ello, proponemos que tanto las providencias como las medidas precautorias admitan sólo recursos de reconsideración ante la autoridad de aplicación.

Por último, referente a las normas que se aplicarán en forma supletoria, proponemos sean las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y no, como se pretende, el Código Procesal Penal.

El artículo 47 en materia de sanciones modifica la multa mínima de \$ 500 a \$ 100, lo cual consideramos desacertado. Una multa de \$ 100 no genera actitud coercitiva alguna en el proveedor para evitar que infrinja la norma. ADELCO por su parte ha calificado de "...vergonzosa tal disminución, ya que la in-

significancia de ese monto "carece de fuerza compulsiva, favoreciendo la comisión de infracciones...". Respecto a la multa máxima, la modificación de \$ 500.000 a \$ 5.000.000 es un despropósito, resultando sumamente excesiva. Por todo lo expuesto consideramos que se deben mantener los valores establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor y será la autoridad de aplicación la que sopesará cada situación en particular considerando el giro comercial del proveedor o prestador del servicio, la magnitud de la infracción a la normativa sometida a consideración y demás requisitos presupuestados por el artículo 49.

El artículo 53 reinstala el beneficio de la justicia gratuita para las actuaciones judiciales. Sabido es que dicho beneficio se encuentra regulado en forma específica por las leyes provinciales locales, lo cual torna innecesaria la previsión del artículo en cuestión, sumado al hecho de que podría alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas.

En el artículo 60 se omite la mención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En líneas generales el proyecto de ley agrega a la ciudad al mencionarse a las provincias. Por ello, no encuentra justificación tal omisión. Proponemos su agregado.

Por último, si bien estamos convencidos de que la implementación de los tribunales administrativos de consumidores en el ámbito nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ha contribuido enormemente a disminuir esa sensación de indefensión a la que estaba sometida la parte débil en la relación de consumo, creemos que queda como saldo pendiente del Poder Legislativo nacional la creación de una justicia nacional de causas de menor cuantía en defensa de los derechos de los consumidores, que privilegie los principios de economicidad, celeridad, oralidad e informalidad (como existen en la mayoría de los países del mundo), posibilitando un acceso franco de los ciudadanos y permitiendo una inmediata solución a los "pequeños grandes" problemas que quedan sin resolver en el consumo diario.

Señor presidente, si bien consideramos plausible una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, los puntos ut supra mencionados hacen que veamos más defectos que virtudes.

Consideramos que se ha tomado la bandera de defensa de los derechos del consumidor en pos de ocultar el verdadero *leit motiv* de la reforma. Esta reivindica una vez más la forma de hacer política que se está llevando a cabo en estos tiempos. Otorgarle mayores atribuciones a la autoridad de aplicación es lisa y llanamente coincidente con la lógica macrocefalista estatal. Un modelo estadocéntrico que además deja un tendal de sectores perjudicados. Nos referimos específicamente a los profesionales liberales. Pretender su inclusión en la ley en cuestión es, ni más ni menos, ignorar solapadamente a los colegios de profesionales.

Por todo lo expuesto hacemos un llamado a la conciencia parlamentaria. ¿Qué son las normas sino lo que nosotros creemos que son? No se trata de una ley más. Se trata de no desprestigiar nuestras instituciones.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SESMA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de Justicia en el proyecto de ley de la señora diputada Córdoba por el que se modifica la ley 24.240, de defensa del consumidor

Introducción. Sobre la importancia del tema

Resulta sumamente importante avanzar en materia de protección de los consumidores, así como facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor.

Los consumidores, en todas partes del mundo pero particularmente en países en desarrollo como el nuestro, afrontan desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación, lo que dificulta que puedan ejercer sus derechos.

Es en este sentido que se conformó primero un marco legal importante, determinado por la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) sancionada en el año 1993 y el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994; y ahora nos proponemos su modificación a fin de ampliar los conceptos, tender a la integración normativa, corregir situaciones que no estaban correctamente contempladas e incluir nuevos casos, generar mejores condiciones para el reclamo e introducir innovaciones en materia de actuaciones administrativas, contemplar las actuaciones de incidencia colectiva, promover la educación del consumidor, etcétera.

Principales modificaciones

Se amplía el objeto (artículo 1º) a fin de contemplar los contratos a título gratuito, de esta manera se le extiende el carácter de consumidor a aquel que recibió un regalo. Para que pueda reclamar si el bien es defectuoso.

Asimismo se establecen distinciones conforme a la existencia o no de asimetrías. Así, no son considerados consumidores o usuarios los fabricantes en cuanto a la adquisición de bienes o servicios para ser utilizados como insumos para la elaboración de otros productos.

Pero sí quedan comprendidas las PyMES en el caso de adquisición de bienes o servicios que no fabrican, por entenderse que continúa la asimetría entre productor y consumidor en cuanto a acceder al conocimiento sobre el producto.

Integración normativa (artículo 3°). Se agrega con un criterio de integración legislativa, que las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

Asimismo, en el artículo 25 se elimina la supletoriedad de la ley 24.240 en relación a los servicios públicos. De esta manera prevalece el criterio de integración normativa; y se deroga el artículo 63, que establecía la subsidiariedad de la ley 24.240 en relación al Código Aeronáutico en los conflictos del servicio de transporte aéreo. De esta manera este sector y cualquier otro quedan alcanzados por la integración normativa del artículo 3°.

Se incorpora el mandato constitucional de brindar trato equitativo y digno al consumidor (8° bis). Estableciendo que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato dignas y equitativas a los consumidores y usuarios, en particular a las personas discapacitadas, ancianos y mujeres embarazadas. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores y usuarios en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Estas conductas podrán ser pasibles de la multa civil (daño punitivo) incorporada a esta ley en el artículo 40 bis.

Se incorpora una serie de mejoras en las condiciones para que los consumidores demanden por sus derechos:

–La posibilidad, cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos, haya sido realizada por medios electrónicos o compra telefónica, de que ésta se pueda rescindir por la misma vía (10 ter).

–Se amplía el plazo de 30 a 60 días, para reclamar si un servicio público fue facturado mal, y se introduce un límite al monto de la mora que pueden cobrar las empresas de servicios públicos por no pago de las facturas. Hasta ahora se aplican las tasas activas para descuentos de documentos comerciales, siendo esto mucho más oneroso para los usuarios (artículo 31).

–Se eleva el plazo para revocar un contrato por venta domiciliaria o por correspondencia. Actualmente es de 5 días corridos, con la reforma pasan a ser 7 días hábiles (artículo 34).

–Se incorpora la figura del daño punitivo del derecho anglosajón, consistente en una sanción de multa a favor de aquél cuando ha sido víctima de una conducta disvaliosa del proveedor. El sistema de resarcimiento de daños en el derecho civil es reparativo, pero no implica ningún castigo a quien ocasiona el daño, y resulta insuficiente para el damnificado, quien tiene que pasar vicisitudes para obtener la reparación. El sentido del daño punitivo no es sólo que el damnificado obtenga un merecido be-

neficio y no sólo una mera reparación, sino también desalentar las conductas generadoras del daño (artículo 40 bis).

Sería bueno, desde el punto de vista del socialismo, que el daño punitivo sea directamente proporcional a la capacidad económica del que causó el daño.

–Incorporación de la posibilidad de determinar la existencia de daño directo al consumidor como resultante de la infracción del proveedor y obligar a éste a resarcirlo, hasta un máximo de \$ 3.000, actualizado anualmente según IPC del INDEC. Está destinada a aquellos consumidores que reclaman en la vía administrativa y no llegan a sede judicial, generalmente porque el monto en discusión es inferior a los costos de la demanda. No obstante, siempre le quedará al consumidor la vía judicial para demandar una suma mayor, de la que deberá deducirse lo percibido en sede administrativa, así como también intentar otros resarcimientos a los que entienda tener derecho.

Se establecen varias innovaciones en materia de actuaciones administrativas entre las cuales se destacan (artículo 45):

1) Que en las causas en que la conciliación no haya sido posible y en las de oficio, se imputará la presunta infracción, es decir se le atribuye el carácter de presunto infractor al proveedor y no sólo dejar constancia de que pueda serlo.

2) Que cuando se hubiere citado a audiencia de conciliación y no comparecieran el denunciante o el denunciado y no se justificara la inasistencia en el plazo de 5 días, el denunciante será considerado desistido de la denuncia y el denunciado será pasible de una multa que va de los \$ 50 a los \$ 5.000.

3) Se suprime el término perentorio de veinte (20) días hábiles para que la autoridad de aplicación dicte la resolución definitiva una vez concluidas las diligencias sumariales. Con esta modificación no estamos de acuerdo porque es importante que no queden dudas sobre el plazo.

4) Una última reforma al artículo 45 consiste en establecer un orden de subsidiariedad normativa, para cuestiones no previstas expresamente en la propia ley 24.240 de defensa del consumidor, en los Códigos de Procedimientos Penal y Civil y Comercial de la Nación, subsanándose así una omisión de la ley vigente en un punto en que la práctica cotidiana de su aplicación en sede administrativa lo reclama como necesario.

Modificaciones positivas en materia de sanciones

–En el artículo 47 se bajan las multas mínimas de \$ 500 a \$ 100 y se incrementan las máximas de \$ 500.000 a 5 millones, actualizadas anualmente por el INDEC.

–El 50% de las multas que imponga la autoridad de aplicación por infracciones cometidas y verifica-

das, será destinado a un fondo especial destinado a cumplir con los fines del capítulo XVI (Educación al consumidor) de la ley 24.241, y a cumplir con actividades de política de consumo destinadas a promover un consumo sustentable.

—Se amplía a cinco (5) años el término dentro del que un proveedor infractor puede ser considerado reincidente si comete nuevas infracciones, y se precisa que dicho lapso se cuenta desde que la sanción anterior quedó firme, en línea con las previsiones del derecho penal, lo que no se especifica en la actual ley 24.240 de defensa del consumidor (artículo 49).

—Se establece que cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido en esta ley (tres años), se tomará el más favorable al consumidor o usuario (artículo 50).

Se vuelven a introducir el beneficio de la justicia gratuita (artículo 53) y las acciones de incidencia colectiva que fueron vetadas en 1993 por el Poder Ejecutivo nacional (decreto 2089/93).

En la práctica estas acciones se fueron promoviendo para beneficio de consumidores y usuarios. Es importante tener en cuenta que en la reforma de la Constitución de 1994 la incidencia colectiva fue reconocida en el artículo 43.

Se introduce asimismo en el artículo 55 el beneficio de la justicia gratuita para las acciones judiciales de incidencia colectiva iniciadas en el marco de la ley 24.240. Quedando excitas tanto del procedimiento de la mediación previa obligatoria como de otros gastos o trámites previos a la promoción de las acciones judiciales.

Estas modificaciones son sumamente relevantes ya que reconocen el protagonismo de las organizaciones de usuarios y consumidores, que no sólo han protagonizado importantes demandas e incorporado la problemática en la agenda pública, sino que también han colaborado con sus actividades de difusión y capacitación para que los ciudadanos adquirieran la capacidad de realizar elecciones informadas y una verdadera conciencia respecto a sus derechos y responsabilidades.

En el artículo 59 (tribunales arbitrales) se introduce que éstos tendrán asiento en la ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia.

Educación al consumidor se incorpora con carácter imperativo (artículo 60) la educación al consumidor en los planes de estudios en la educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria.

Consumo sustentable con protección del medio ambiente: en el artículo 43 se agregan a las facultades de la Secretaría de Coordinación Técnica las destinadas a favorecer un consumo sustentable con protección del medio ambiente.

Además se introducen modificaciones a la ley 25.065 de tarjetas de créditos y a la ley 22.802 de lealtad comercial.

En el primer caso (artículo 50) se establece que en las cuestiones comerciales los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación, quienes podrán delegar atribuciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. Además la autoridad de aplicación nacional podrá actuar en forma concurrente en todo el país. De esta manera los consumidores tendrán un organismo próximo al cual recurrir.

En el segundo caso, se establece que las apelaciones por esta ley sean ventiladas en sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, cuando las infracciones se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, y en las cámaras federales de apelación, cuando los hechos se cometieron en el interior del país, en lugar de los juzgados de primera instancia.

En el artículo 27 y en concordancia con la reforma del artículo 45 de la ley 24.240 se establece la supletoriedad del Código Procesal Penal de la Nación y la del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en ese orden, para resolver aquellas cuestiones no previstas expresamente en la Ley de Lealtad Comercial y sus reglamentaciones.

Esta descripción de las principales modificaciones introducidas no hace sino ratificar y exponer en casos concretos la valoración positiva que expresara al comienzo de mi intervención. Por las razones expuestas el bloque del Partido Socialista acompaña con su voto la reforma de la ley 24.240.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO VILLAVERDE

**Fundamentos del apoyo del señor diputado
al proyecto de ley en revisión por el que
se autoriza la salida del territorio nacional
de medios, personal military y de seguridad, como
también personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social
y de infraestructura, para que participen
en la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití**

Como lo expresan los fundamentos y objetivos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la determinación es preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de la República de Haití y la consolidación de sus instituciones democráticas para alcanzar la estabilidad y el desarrollo. El requerimiento es a la Minustah y a la comunidad internacional para que sigan prestando asistencia.